CAPÍTULO XI

EL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL EN LOS RÉGIMENES DISCIPLINARIOS APLICABLES AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN COLOMBIA

Sergio Luis Mondragón Duarte

Abogado. Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Especialista en Contratación Estatal, Magíster en Derecho Público. Doctorando en Seguridad Humana y Derecho Global. Docente Investigador de la Maestría en Derecho Administrativo adscrita a la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Correo electrónico: sergio.mondragonu@unaula.edu.co.

Juan Carlos Barreiro

Abogado y Economista. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos y Privados. Especialista en Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado. Maestrando en Derecho Administrativo. Docente Catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Correo electrónico: juan.barreiro1341@unaula.edu.co.

Mario Heimer Flórez Guzmán

Matemático y Físico. Especialista en Física. Doctor en Ciencias de la Educación. Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Remington. Correo electrónico: mario.florez@uniremington.edu.co.

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo dar a conocer la aplicación del principio del juez natural en los regímenes disciplinarios que operan de forma general al interior de las entidades públicas y privadas en Colombia. De tal manera que a través de una metodología basada en un enfoque cualitativo y en un método deductivo-sistemático se logró exhibir una sólida, concreta y clara revisión de literatura colmada de múltiples contenidos teóricos, epistemológicos y conceptuales que versan sobre las nociones básicas de este principio, los elementos que lo integran, y su campo de aplicación en los distintos regímenes disciplinarios existentes al interior de las entidades públicas y privadas en Colombia. Así, el texto permite concluir que el principio del juez natural tanto a la luz del ordenamiento jurídico nacional como internacional se funda en la competencia, preexistencia, imparcialidad e independencia de una autoridad administrativa o judicial para conocer, investigar, sancionar y/o juzgar un caso concreto, lo cual funge de forma directa, transversal e inmediata para todos los procesos disciplinarios que se adelantan al interior de las entidades públicas y privadas.

Palabras Clave: Juez Natural, Ordenamiento Jurídico, Régimen Disciplinario, Servidor Público, Trabajador Particular.

THE PRINCIPLE OF THE NATURAL JUDGE IN THE DISCIPLINARY REGIMES APPLICABLE TO THE INSIDE OF PUBLIC AND PRIVATE ENTITIES IN COLOMBIA

Abstract

The present investigation aimed to publicize the application of the principle of the natural judge in disciplinary regimes that operate in general within public and private entities in Colombia. In such a way that through a methodology based on a qualitative approach and a deductive-systematic method it was possible to exhibit a solid, concrete and clear review of literature filled with multiple theoretical, epistemological and conceptual contents that deal with the basic notions of this In principle, the elements that integrate it, and its field of application in the different disciplinary regimes within the public and private entities in Colombia. Thus, the text allows us to conclude that the principle of the natural judge both in the light of the national and international legal system is based on the competence, preexistence, impartiality and independence of an administrative or judicial authority to know, investigate, punish and / or judge a specific case, which acts directly, transversally and immediately for all disciplinary processes that are carried out within public and private entities.

Keywords: Disciplinary Regime, Legal Order, Natural Judge, Public Servant, Private Worker.

Proyecto de investigación

El actual capítulo de libro deriva de la investigación titulada “El principio del juez natural en los procesos disciplinarios promovidos contra servidores públicos de elección popular en Colombia”, la cual fue aprobada por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín-Antioquia, en la convocatoria interna de proyectos de investigación del año 2019, bajo la modalidad de dogmática jurídica, con un monto de financiación equivalente a la suma de 3.000.000 de pesos colombianos.

Introducción

El presente opúsculo resuelve la dicotomía concerniente al principio del juez natural en relación con los regímenes disciplinarios que operan al interior de las entidades públicas y privadas en Colombia, por cuanto en el medio académico aún se desconoce la competencia que tienen algunas autoridades para investigar y sancionar disciplinariamente a ciertos empleados tanto en el sector público como en el sector privado.

En ese sentido, es menester que las entidades tanto públicas como privadas adelanten correcta y adecuadamente las investigaciones en contra de sus trabajadores, por lo que es pertinente en el campo del derecho disciplinario conocer con certeza los criterios básicos que demanda la garantía del juez natural respecto de los funcionarios en los que se encuentra radicado el ejercicio de la potestad disciplinaria al interior de ellas.

De esta forma, la actual investigación deja clara la naturaleza jurídica de las autoridades que tienen a cargo la facultad para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos y a trabajadores particulares, por lo que el desarrollo de las variables de la investigación asociadas a los servidores que tienen vinculación legal y reglamentaria o contractual con entidades estatales y empleados que tienen vinculación contractual con empresas adscritas al sector privado, se centró en función de las categorías del principio del juez natural, los elementos que lo integran, y el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de ellos en el sector público y privado.

Fundamentación teórica

La teoría que fundamentó la construcción del presente capítulo de investigación corresponde a la teoría del servicio público, la cual funda la necesidad de que las entidades o instituciones públicas y privadas presten de manera regular, permanente y obligatoria cualquier actividad económica organizada, tendiente a resolver necesidades de interés general, pública o colectiva, en el marco de un régimen jurídico especial de derecho público que garantice la participación activa de la administración pública en su ofrecimiento, regulación y control directo (Matías, 2013).

En ese sentido, Colombia como Estado Social de Derecho, cuyos fines esenciales son entre otros, la prestación de servicios a la comunidad (Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 2014-01511, 2018), requiere funcionar por medio de personas físicas (López, 2013), a través de sus entidades públicas y empresas privadas, para dar cumplimiento a sus cometidos, fines e intereses, por lo que los servidores públicos y los trabajadores particulares se encuentran vinculados a una relación jurídica subjetiva de carácter legal, reglamentaria o contractual, que demanda el cumplimiento de derechos y obligaciones ante la entidad, empresa o institución que lo emplea, en aras de mantener, preservar y garantizar su ética organizacional (Cota y Hamasaki, 2019).

De esta manera, el Estado colombiano reconoce la existencia de autoridades y procedimientos disciplinarios que le permiten tanto al servidor público como al trabajador del sector privado reconducir o corregir su comportamiento cuando se presenta una afectación sustancial al régimen de derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses que lo cobijan durante su relación legal, reglamentaria o contractual en relación con el ejercicio de su función, cargo o actividad (Martínez y Ramírez, 2008).

Desarrollo del trabajo

El presente trabajo se desarrolló a partir de las categorías estructurales planteadas al interior del mismo, por tal motivo, partiendo del método deductivo que consagró el

estudio, se abordó en un comienzo la noción amplia o general del principio del juez natural, pasando seguidamente por la descripción de los elementos que lo componen, y continuando su análisis en el contexto del ordenamiento jurídico colombiano hasta llegar de forma correlativa y coherente a la sistematización de esta garantía en relación con el ejercicio de la actividad disciplinaria al interior de las entidades públicas y privadas en Colombia.

Método

El diseño empleado para la ejecución de la actual pesquisa se ciñe a un enfoque cualitativo con un método deductivo-sistemático (Hernández, 2014), cuyos participantes corresponden a la cantidad de tres investigadores con conocimiento en el área de las ciencias jurídicas y empresariales, las cuales conectaron directamente con el tema objeto de estudio a partir de la relación que pudieron establecer entre el principio del juez natural y los diversos campos de acción del mismo en las entidades o empresas pertenecientes al sector público y privado. En ese sentido, como bien lo señalan Gross, Terán y Terán (2019) “metodológicamente esta investigación está orientada bajo el paradigma cualitativo de carácter documental con análisis interpretativo de un universo de documentos relacionados directamente con la temática analizada” (p. 165).

En ese orden de ideas, los instrumentos empleados para el desarrollo de la investigación conciernen a la revisión de literatura proveniente de bases de datos, textos físicos y providencias judiciales emanadas de las altas cortes nacionales e internacionales consignadas en relatorias digitales (Hernández, 2014), por lo que el procedimiento agotado para la culminación del texto definitivo que contiene los hallazgos siguió el esquema propuesto para tal efecto por Hernández (2014), quien señala como fases del proceso investigativo cualitativo: La construcción de la idea, el planteamiento del problema, el abordaje como tal del tema, la apropiación del diseño de estudio, la definición y el acceso a la muestra inicial de estudio, la recolección de la información, el análisis de los datos, la interpretación de los resultados, la discusión de los mismos, y la redacción del informe en el que consta la consolidación final de los resultados.

Resultados y discusión

Nociones básicas sobre el Principio del Juez Natural

El juez natural, constituye una garantía que conforma el núcleo esencial del debido proceso, teniendo en cuenta que “el debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en la mayor expresión del derecho procesal” (Agudelo, 2006, pág. 396). Luego, los orígenes del concepto más próximo del juez natural se remontan a la Inglaterra del siglo XIII, en la Carta Magna de Juan sin Tierras, promulgada el 15 de junio de 1215, donde se hallaba la disposición normativa que señalaba que la detención, el encarcelamiento, la privación de derechos o bienes, el destierro o perjuicio de una persona, no podría darse sin previo juicio legal adelantado por un par, con base en la ley de la tierra (Quispe, 2013, p. 117). Posteriormente con la promulgación de la Bill of Rights en los Estados Unidos en el año de

1791, se reconoció el juzgamiento por causas criminales de manera ágil y pública, a partir de autoridades judiciales imparciales y leyes preexistentes al momento de la comisión del delito, y con fundamento en una causa motivada, pruebas testimoniales confrontadas en careo, y una defensa técnica material, radicada en un abogado (Quispe, 2013, p. 118).

Aparece entonces el principio de legalidad, estableciendo otros factores de orden material, territorial y funcional. Como bien refiere Agudelo Ramírez (2006) “la legalidad del juez se vincula con la idea de un juez con jurisdicción, cuya aptitud para participar en el proceso se determina con los distintos factores de competencia” (p.93) entendiendo por competencia la medida de la jurisdicción de que cada juez es titular, lo cual significa que existe una necesidad de que el juez sea pre constituido por la ley y no pos factum; con unas competencias inderogables e indisponibles, y sumado a ello, la prohibición de jueces extraordinarios y especiales; por lo que aquí cabría recordar que en 1766 hizo su aparición la expresión “Juge (Jurispr.)” esto es juez natural, para designar precisamente y en oposición a los jueces comisionarios o extraordinarios, al juez ordinario dotado de competencias legalmente establecidas y no constituido después de la ejecución del hecho (Ferrajoli, 1995, pág. 590).

Esta idea fue recogida años más tarde en la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) bajo el título de “Garantías Judiciales” desarrolladas en el artículo 8, estableciendo que toda persona debe ser oída por “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” (p. 8). En ese orden de ideas se puede precisar que el juez natural es una garantía judicial que hace parte del núcleo esencial del debido proceso y que se materializa por la competencia, la independencia e imparcialidad del mismo, y aun así no basta con eso, sino que debe haber sido establecido previamente por la ley.

A partir de lo anterior, se tiene que en Colombia se instituye el debido proceso como un derecho fundamental, a través del artículo 29 de la Constitución Política, en el que se indica que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (Constitución Política de Colombia, 1991), por lo que si bien no señala de manera taxativa que el juez o tribunal debe ser competente, imparcial y establecido previamente, ello no obsta para que se deba cumplir con tales elementos integradores del principio del juez natural, debido a que son reglas universales que se han incorporado en la legislación nacional a partir del bloque de constitucionalidad, y es por ello que el concepto de esta figura ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como una garantía que tiene una finalidad más sustancial que formal, toda vez no solo protege el establecimiento de la jurisdicción encargada del juzgamiento previamente a la comisión del hecho, sino la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para el procesado (Corte Constitucional, Sala Plena Sentencia C-200 de 2002).

Elementos que integran el Principio del Juez Natural

Competencia

El Principio del Juez Natural se funda en la existencia de una autoridad a la que la Constitución o la Ley le han confiado el conocimiento de determinados asuntos para su resolución (Corte Constitucional, Sentencia C-444 de 1995). De esta manera la competencia

que debe ostentar un juez natural para ocuparse de un caso concreto se concentra en diversos factores, como la naturaleza del proceso, la cuantía, la calidad de las partes o intervinientes procesales, la naturaleza de la función promovida por la autoridad que adelanta el trámite procesal en cada una de sus fases, y el lugar donde se debe llevar a cabo el proceso (Corte Constitucional, Sentencia C-655 de 1997).

Así mismo, este criterio de competencia debe contar con ciertas aptitudes para su reconocimiento, como son la legalidad o creación legal, la imperatividad o no derogabilidad de la misma por parte de otra autoridad, la inmodificabilidad o no variabilidad de aquella, la indelegabilidad o no asunción de la misma por otro funcionario, y el carácter público que se cimenta sobre la base del interés general (Corte Constitucional, Sentencia C-655 de 1997). De esta manera, se aprecia que la jurisprudencia ha sido enfática en determinar que la competencia es un elemento esencial del derecho al juez natural, por lo que su reconocimiento es claro a todas luces por partes de los operadores judiciales en ordenamientos jurídicos, como el colombiano.

De igual forma, la doctrina también ha reconocido la competencia como categoría básica e integradora del juez natural, al señalar que esta garantía del debido proceso debe distinguirse a través de tres elementos: “a) Institucionalización legislativa previa al hecho, b) Designación legal, y c) Competencia para intervenir en el proceso, según la ley previa al hecho” (Acuña, 2015, p. 7). Por lo que al final, como bien lo refiere Romero Seguel (2015) “en la determinación del derecho al juez natural debe primar la competencia asignada por razón de la materia, evitando que puedan actuar juzgado temas comunes en forma paralela o con posterioridad dos o más tribunales” (p. 604).

Preexistencia

El Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, el Artículo 29 de la Constitución Política de 1991, los Artículos 5 y el numeral 2 del Artículo 153 de la Ley 270 de 1996, refieren el principio del juez natural desde la predeterminación constitucional y/o legal que debe tener una autoridad administrativa o judicial competente para adoptar una decisión de fondo en un caso concreto (Mondragón, 2017).

De conformidad con lo anterior, el criterio de preexistencia en relación con el principio del juez natural, hace relación a la creación constitucional o legal de una autoridad con competencias previas para resolver un caso, pues como bien lo señalan tanto Escobar (2010), como la Corte Constitucional (Sentencia C-1260 de 2005), el juez natural se consagra a partir de su competencia y preexistencia constitucional o legal, singularmente establecidas.

Es por esta razón que la preexistencia de un juez natural para conocer, investigar, sancionar y/o juzgar una falta, una contravención o un delito, parte de la creación de un funcionario investido de jurisdicción y competencia, que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales de los intervinientes procesales (Ardila Mora, 2014), lo cual se traduce en la valoración jurídica y en la adopción de una decisión de fondo frente a un caso concreto por parte de un funcionario, cuya competencia le ha sido atribuida previamente por el constituyente o legislador, para asumir las cargas e implicaciones que derivan de ella (Corte Constitucional, Sentencia C-537 de 2016).

Imparcialidad

La Real Academia Española ha definido la imparcialidad como la “falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud” (Real Academia Española, 2014). Autores como Montero Aroca (2006), aseveran que la función jurisdiccional debe procurar la defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas, sin embargo, la imparcialidad del operador judicial se pierde cuando un proceso se conduce en favor de alguna de las partes (pág. 91).

De esta manera, la imparcialidad de un juzgador se encuentra revestida de ciertas cualidades o virtudes, como son la ausencia de prejuicios, especialmente raciales o religiosos; la ignorancia de sugerencias o persuasiones externas que puedan incidir en su criterio, postura o ánimo; el rechazo por cualquier ideología determinada; la indiferencia absoluta frente al otorgamiento de cualquier dádiva o soborno; la declaratoria de impedimento cuando existe algún apego, sentimiento, afecto o relación de amistad u odio; la renuncia a cualquier tipo de intervención, inmiscusión o participación en la investigación o en la formación de los elementos de juicio; y la separación de los precedentes judiciales de forma arbitraria y absoluta (Picado Vargas, 2014).

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Caso Piersack contra Bélgica, 1 de octubre de 1982) ha referido que la imparcialidad se define como la ausencia de prejuicios o parcialidades, que comprende dos aspectos: uno subjetivo, que concierne a la convicción personal de un juez determinado en un caso en concreto; y uno objetivo, que respecta a la formación de convicción suficiente para evitar cualquier duda razonada frente al caso. De esta manera, para que se viole la imparcialidad subjetiva, los prejuicios deben provenir de episodios o vivencias ajenas al contacto con el procedimiento a resolver, es decir, el prejuicio no se genera con el contacto procesal, sino de forma extrajudicial, a través de las relaciones cercanas que el juez pueda tener con una de las partes o sus parientes o con la situación objeto del debate, no obstante, la imparcialidad se debe presumir mientras no se demuestre lo contrario, pues puede ser posible que las sospechas o presunciones de parcialidad objetiva provengan de actuaciones en etapas anteriores al juicio, que se hayan convertido en convicciones preconstituidas como consecuencia de decisiones previamente adoptadas (Orellana Solari, 2013).

Independencia

En relación con este criterio integrador del principio del juez natural, se observa que Beltrán Montoliu (2018), sostiene que la independencia del juez es la libertad de adoptar una decisión con base la normativa que impera en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, Picado (2014), ha afirmado que la independencia del juez recae sobre la posibilidad que tiene el mismo para guiar un proceso y proferir un fallo a partir de su conocimiento legal y experiencia judicial.

Por otra parte Mora (1999), sostiene que el juez debe contar con protección física y jurídica de cualquier presión o injerencia tanto interna como externa a la hora de resolver un caso, y además debe haber evitado cualquier compromiso con alguna de las partes, o incluso con otros colegas o superiores que podrían tener interés directo o indirecto en el mismo.

Así las cosas, los criterios de preexistencia, independencia e imparcialidad responden al mismo tipo de exigencias, esto es, tratan de proteger el derecho de los ciudadanos a ser juzgados desde el deber ser del derecho, partiendo de la base que los operadores jurídicos deben ser previamente creados constitucional o legalmente con funciones claras y específicas para que puedan asumir y abordar el conocimiento de un caso; deben estar exentos de cualquier vicio, presión o influencia extraña, ajena o externa al derecho que pueda incidir en los móviles tendientes a la resolución del caso; y deben estar seguros de su conocimiento técnico, científico y legal, así como de su lógica racional y de su experiencia profesional para adoptar una decisión autónoma e independiente (Serra, 2004).

El Principio de Juez Natural en el Derecho Disciplinario Colombiano a nivel de las entidades públicas y privadas

La estructura de los regímenes disciplinarios en Colombia se fundamenta en la potestad sancionadora que tiene el Estado para establecer mandatos imperativos que le permita sancionar a todas las personas que cometan infracciones establecidas por el ordenamiento jurídico (Alcocer, 2016), de tal manera que “el establecimiento de un régimen disciplinario constituye un espacio de libre configuración legislativa” (Corte Constitucional, Sentencias C-037 de 1996, C-827 de 2001, C-391 de 2002, C-948 de 2002, C-884 de 2007, C-1193 de 2008), que le permite al poder legislativo gozar de un amplio margen de libertad para establecer el régimen disciplinario, desde la “configuración de las reglas de derecho -como supuestos necesarios para la convivencia pacífica- a la instancia del poder público de mayor ascendencia democrática” (Corte Constitucional, Sentencias C-391 de 2002 y C-884 de 2007).

En ese orden de ideas, en relación con el régimen disciplinario aplicable a servidores públicos, se tiene que el mismo constituye una parte del derecho administrativo sancionador, y corresponde a aquella potestad que tiene el Estado para sancionar a sus propias autoridades o agentes en el marco de la función pública, a través de la cual se materializa la aplicación de las normas sustanciales y procesales que exigen el cumplimiento estricto de los fines del Estado por parte de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo (Corte Constitucional, Sentencia C-341 de 1996).

En palabras de Barón (2011), los principios del derecho disciplinario conducen a “la preservación de la legalidad que hace parte de las garantías y derechos con carácter normativo, elementos indispensables para que exista cierta igualdad y se alcance el fin constitucional” (p 187). De esa manera, como bien lo refiere Gómez (2011), el Derecho Disciplinario en Colombia se erige como una rama autónoma e independiente del derecho, a partir de las teorías sobre el ius puniendi del Estado, la ilicitud sustancial y las relaciones especiales de sujeción.

Por otra parte, haciendo referencia al régimen disciplinario aplicable al interior de las entidades privadas se aprecia que los artículos 29 y 53 de la Constitución Política de 1991 y los artículos 23, 111, 112, 113, 114 y 115 del Código Sustantivo de Trabajo (Decreto-Ley 2663 de 1950), regulan todo lo concerniente al procedimiento disciplinario de los trabajadores. Así mismo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-593 de 2014 (Corte Constitucional, 2014), señaló que “cada empresa debe dar cumplimiento a varios criterios

generales y particulares en materia disciplinaria para la garantía del debido proceso. Los criterios generales hacen referencia a la potestad disciplinaria misma y los criterios particulares al procedimiento especial seguido en cada caso” (Barco, 2017).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio; los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas; y quienes administren recursos públicos u oficiales.

En ese sentido, la misma Ley 734 de 2002, hace la distinción para el caso de notarios, que serán investigados y sancionados disciplinariamente por la Superintendencia de Notariado y Registro, al igual que los curadores urbanos, según lo dispuesto por la Ley 1796 de 2016, sin perjuicio del poder preferente que ejerza al respecto en ambos casos la Procuraduría General de la Nación; y para los funcionarios de la Rama Judicial, los con jueces y jueces de paz, que serán investigados y sancionados disciplinariamente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales.

Los miembros de la fuerza pública serán disciplinados conforme a su reglamentación especial, esto es, la Ley 1862 de 2017 en el caso de Fuerzas Militares y la Ley 1015 de 2006 para el caso de la Policía Nacional (Ramírez, Carrillo y Sánchez, 2018).

Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a la Ley 734 de 2002. También son disciplinables, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria (Restrepo, 2019).

Ahora bien, la potestad disciplinaria en el sector público es ejercida de forma preferente por la Procuraduría General de la Nación, pero también por las Personerías, las Oficinas de Control Interno, los funcionarios administrativos con potestad disciplinaria y la jurisdicción disciplinaria. Al respecto el Art. 67 de la Ley 734 del año 2002, establece que, el ejercicio de la acción disciplinaria está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, la Superintendencia de Notariado y Registro, los Personeros Distritales y Municipales; las oficinas de control disciplinario interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los nominadores o superiores jerárquicos inmediatos.

Por otra parte, en materia de derecho laboral el Artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo establece el procedimiento para las sanciones disciplinarias dentro de la relación laboral, por lo que cualquier persona que cuente con un vínculo contractual o laboral vigente con una empresa o entidad privada puede ser sujeto de un proceso disciplinario, por parte de su empleador, bien sea de forma directa o a través de las Oficinas de Gestión Humana o Talento Humano, siempre que dicha facultad sancionatoria sea “ejercida en forma razonable y proporcional a la falta que se comete y, estar plenamente probados los hechos que se imputan” (Ministerio de Trabajo, 2019).

Así pues, en el sector privado, las entidades deben establecer en sus reglamentos de trabajo, los criterios o parámetros mínimos que disponen el ejercicio de la actividad

disciplinaria, para permitirle a los trabajadores desde el comienzo de su vinculación o relación laboral conocer las conductas que pueden dar origen a una sanción de ese tipo, así como el procedimiento diseñado para adelantar el proceso disciplinario (Barco 2019).

Lo anterior, en razón a que siempre será necesario garantizar el debido proceso en las actuaciones disciplinarias que se promuevan tanto en el sector público como en el privado, lo cual sería, por ejemplo, notificarle personalmente al empleado o trabajador de la apertura del proceso disciplinario por escrito, informándole para tal efecto las faltas que se le endilgan porque fueron presuntamente cometidas; formularle por escrito o verbalmente los cargos que se le atribuyen, dejando claramente constancia de las conductas y de su calificación como faltas disciplinarias; trasladarle o ponerle en conocimiento las pruebas que fueron aportadas para la formulación de los cargos; indicarle el término que tiene para rendir sus descargos, controvertir las pruebas recaudadas en su contra, y presentar las pruebas que considere necesarias para ejercer su efectiva defensa; motivarle el acto por medio del cual se decide sobre el proceso disciplinario; imponerle una sanción disciplinaria proporcional a los hechos que dieron origen a la investigación respectiva; y brindarle la posibilidad de impugnar la decisión ante un superior jerárquico, así como de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para el caso de los servidores públicos, o a la jurisdicción laboral ordinaria para el caso de los trabajadores privados, con el fin de que la sanción sea revisada.

Conclusiones

De conformidad con las consideraciones esbozadas previamente en torno a la consagración de la figura del juez natural como principio aplicable tanto a nivel nacional como internacional, se aprecia que esta garantía se erige como un herramienta o instrumento procesal que permite el reconocimiento de una autoridad preexistente, autónoma e independiente con competencia para investigar y juzgar un caso concreto. En ese sentido, este principio contempla unos elementos estructurales relevantes como son la preexistencia, independencia e imparcialidad, que garantizan derechos fundamentales y procesales como el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.

Así mismo, en Colombia el reconocimiento de esta garantía no solo se da en el marco de lo expuesto por el Artículo 29 de la Carta Constitucional de 1991, sino también su raigambre se forja con ocasión de la disposición normativa que refiere el alcance del bloque de constitucionalidad, contenido en el Artículo 93 del mismo texto normativo, el cual incorpora e integra todos aquellos tratados y convenios internacionales celebrados, suscritos y ratificados por el Estado Colombiano en materia de derechos humanos, lo cual genera su aplicación directa e inmediata en virtud de los mismos, al interior de casos administrativos y judiciales en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, vale la pena destacar que dicho principio se reconoce de forma directa y transversal en los procesos disciplinarios que se adelantan en contra de servidores públicos y de trabajadores vinculados contractualmente en empresas privadas, de tal manera que la normativa vigente tanto en el sector público como privado avala la existencia de autoridades competentes, preexistentes, imparciales e independientes para adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones respectivas, cuando se cometan faltas o conductas irregulares en el ejercicio de un cargo, que atenten o afecten sustancialmente los cometidos

u objetivos del mismo, así como las finalidades, fines e intereses que demandan el buen funcionamiento y la prestación de un adecuado, oportuno y eficiente servicio, por parte de las entidades públicas y privadas.

Referencias bibliográficas

- Acuña, R. (2015). *La garantía constitucional del juez natural*. En Alvarado (Presidencia) *VII Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista*. Congreso llevado a cabo en el Séptimo Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista, Azul, Argentina.
- Agudelo, M. (2006). *El debido proceso*. Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal aldizkaria, 18(3), 395-413.
- Alcocer, W. (2016). *Estudio sobre el Régimen Disciplinario del Magisterio* (Documento en línea) Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5456265.pdf>.
- Ardila Mora, J. A. (2014). *El principio de juez natural y la judicialización de los delitos informáticos*. (Tesis de Maestría) Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.
- Barco, C. (2017). *Generalidades del Proceso Disciplinario en las Empresas Privadas* (Documento en Línea). Recuperado de: <https://www.notinetlegal.com/> (consulta: 2020, enero 27).
- Barón, M. (2011). *Las Garantías Fundamentales frente al Proceso Disciplinario en Colombia*. Derecho y Realidad, (18) p 166-188. Recuperado de: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/download/4895/3985/.
- Beltrán, A. (2018). *Imparcialidad judicial y actividad probatoria en la Corte Penal Internacional*. (I. B. (IBRASPP), Ed.) Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 4(2), 605- 644.
- Consejo de Estado. Sección Segunda (Subsección B). Sentencia del 26 de julio de 2018. Rad. 2014-01511. CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
- Constitución Política de Colombia. (20 de Julio de 1991). Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C., Colombia: Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html.
- Corte Constitucional. Sentencia C- 1193 del 3 de diciembre de 2008. Exp. D-7325. MP. Jaime Araujo Rentería.
- Corte Constitucional. Sentencia C- 948 del 6 de noviembre de 2002. Exp. D-3937 y D-3944. MP. Álvaro Tafur Galvis.

- Corte Constitucional. Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996. Exp. P.E.-008. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
- Corte Constitucional. Sentencia C-1260 del 5 de diciembre de 2005. Exp. D-5731. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
- Corte Constitucional. Sentencia C-200 del 19 de marzo de 2002. Exp. D-3690. MP. Álvaro Tafur Galvis.
- Corte Constitucional. Sentencia C-341 del 05 de agosto de 1996. Exp. D-1135. MP. Antonio Barrera Carbonell.
- Corte Constitucional. Sentencia C-391 del 22 de mayo de 2002. Exp. D-3791. MP. Jaime Córdoba Triviño.
- Corte Constitucional. Sentencia C-444 del 4 de octubre de 1995. Exp. D-869. MP. Carlos Gaviria Díaz.
- Corte Constitucional. Sentencia C-537 del 5 de octubre de 2016. Exp. D-11271. MP. Alejandro Linares Cantillo.
- Corte Constitucional. Sentencia C-593 del 20 de agosto de 2014. Exp. D-10032. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
- Corte Constitucional. Sentencia C-655 del 3 de diciembre de 1997. Exp. D-1708. MP. Carlos Gaviria Díaz.
- Corte Constitucional. Sentencia C-827 del 8 de agosto de 2001. Exp. D-3345. MP. Álvaro Tafur Galvis.
- Corte Constitucional. Sentencia C-884 del 24 de octubre de 2007. Exp. D-6761. MP. Jaime Córdoba Triviño.
- Cota, E., y Hamasaki, R. (2019). *La Pyme y el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR): Razones para perder la Certificación de CEMEFI*. En Chirinos, Ramírez, Godínez, Barbera y Coromoto (Ed.) *Tendencias en la Investigación Universitaria (Una Visión desde Latinoamérica)*. Santa Ana de Coro: Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero.
- Decreto 2663 de 1950. Publicada en el Diario Oficial N° 27407 del 09 de septiembre de 1950.
- Escobar, J. (2010). *Manual de Teoría General del Proceso- Fundamentos Jurisprudenciales y Doctrinales*. Ibagué: Universidad de Ibagué.
- Ferrajoli, L. (1995). *Derecho y razón*. Teoría del Garantismo Penal. Madrid: Trotta.
- Gómez, C. (2011). *El Derecho Disciplinario en Colombia. "Estado del Arte"*. Revista Derecho Penal y Criminología, 32 (92), p 115-154. Recuperado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/download/2963/2607/>.
- Gros, M., Terán, C., y Terán J (2019). *Enfoque de Visión Intercultural en Salud: Entre la retórica y la realidad del currículo de formación médica en la Universidad*

- Ecuadoriana*. En Chirinos, Ramírez, Godínez, Barbera y Coromoto (Ed.) *Tendencias en la Investigación Universitaria (Una Visión desde Latinoamérica)*. Santa Ana de Coro: Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero.
- Hernández, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: Editorial Mc Graw Hill.
- Ley 1952 de 2019. Publicada en el Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019.
- Ley 1796 de 2016. Publicada en el Diario Oficial No. 49.933 de 13 de julio de 2016.
- Ley 734 de 2002. Publicada en el Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002.
- López, M. (2013). *La responsabilidad administrativa de los servidores públicos en México*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Martínez, E., y Ramírez, J. (2008). *Régimen del Servidor Público*. Bogotá D.C.: Escuela Superior de Administración Pública.
- Matías, S. (2013). *La Teoría del Servicio Público y las Telecomunicaciones*. Diálogos de Saberes. 1 (38) 43-62. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4696237.pdf>.
- Ministerio del Trabajo (2019). *Concepto de Proceso Disciplinario del Sector Privado- Uso de WhatsApp*. (Radicado 02EE2017410600000054228). Recuperado de: <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60092587/02EE2017410600000054228+Disciplinario+Sector+Privado.pdf>.
- Mondragón, S. (2017). *Límites al Control Judicial de Fallos Disciplinarios proferidos por la Procuraduría General de la Nación a partir de la Ley 734 de 2002* (Tesis de Maestría) Universidad Santo Tomás, Bogotá D.C, Colombia.
- Montero, J. (2006). *Derecho a la imparcialidad judicial. comentario al artículo II-107 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos*. (U. R. Público, Ed.) Revista europea de derechos fundamentales (7), 69-112.
- Mora, L. (1999). *La independencia del juez en la jurisprudencia de la sala constitucional costarricense*. (C. d. (España), Ed.) Anuario iberoamericano de justicia constitucional (3), 407-426.
- Orellana, N. (2013). *Cuestionamientos sobre la imparcialidad del Juez de Garantía en el Procedimiento Simplificado chileno*. (C. Universidad San Sebastián, Ed.) Revista de derecho y ciencias penales (19), 47-73.
- Picado, C. (2014). *El derecho a ser juzgado por un juez imparcial*. Revista de JUDEX (2), 31-62.
- Quispe, F. (2013). *El derecho al juez natural como derecho humano- y los tribunales militares en Colombia*. Eunomía-Revista en Cultura de la Legalidad, 116-138.
- Ramírez, F., Carrillo, G., y Sánchez, M. (2018). *Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional: Su aplicación frente a los soldados que*

- prestan el servicio militar obligatorio y los auxiliares de policía.* (Trabajo de Especialización) Universidad Libre Seccional Cúcuta, San José de Cúcuta, Colombia.
- Real Academia Española (2014). *Concepto de Imparcialidad* (Diccionario de la Lengua Española en Línea). Recuperado de: <https://www.rae.es/>(consulta: 2019, diciembre 01).
- Restrepo, F. (2019). *Acción disciplinaria de los servidores públicos.* (Documento en línea). Disponible en: https://www.personeriatagui.gov.co/sitio/ver_noticia/ley-734-de-2002.
- Romero, A. (2015). *El Derecho al Juez Natural y la Competencia de los Tribunales Especiales (la aplicación de la regla: electa una via per partem ad aliam potest venire). Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de 6 de agosto 2014. Reclamo contra sentencia tribunal de la libre competencia dictada en los autos “sonda s.a. contra el servicio de registro civil e identificación”. Rol cs n° 13.972-2013.* Revista de Derecho. 22(1) 597-604. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rducn/v22n1/art17.pdf>.
- Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).* Gaceta Oficial N° 9460 del 11 de febrero de 1978. Recuperado de https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf.
- Serra, R. (2004). *La libertad ideológica del juez.* Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia: Universidad de Valencia.
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia 8692 del 1 de octubre de 1982. Exp. Caso Piersack (TEDH-43). Presidente: Gérard Wiarda.